

El asesinato del general Prats

Los batallones olvidados de la lucha contra el marxismo

por Gregorio SELSER

El doctor Siro A. M. de Martini, secretario del juzgado federal en lo Criminal y Correccional del juez doctor Eduardo Marquardt, de Buenos Aires, Argentina, regresó el 14 de este mes de un viaje que realizó en julio a Estados Unidos, para recabar informes y documentación que obran en poder de la justicia norteamericana en relación con Michael Townley, el ex agente de la CIA y de la DINA chilena que se confesó culpable —y hoy guarda prisión por ello— del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronni Moffit, el 21 de septiembre de 1976.

El viaje del doctor de Martini a Estados Unidos se debe a que fue reabierto en Buenos Aires, en el juzgado del doctor Marquardt, la causa por la muerte del general Carlos Prats y su esposa, ocurrida en la noche del 30 de septiembre al 1.º de octubre de 1974 en el Barrio Norte de la capital argentina. El ex comandante en jefe del ejército de Chile regresaba en su automóvil de una reunión y, al disponerse a descender de su automóvil para abrir el garage de la casa de departamentos en la que residía, el vehículo estalló y muchos de sus restos fueron hallados en las azoteas de muchos edificios de la poblada vecindad.

LAS PERIPECIAS DEL GENERAL PRATS

Aunque los periódicos de los días siguientes fueron muy parcos, confusos y hasta contradictorios en la información, en general coincidieron en que el explosivo había sido detonado por control remoto y que, por sus efectos, debía ser muy poderoso. También se dejó filtrar la noticia de que inmediatamente después del atentado, personal de seguridad que ingresó al departamento del matrimonio Prats se habría llevado papeles personales del extinto, entre ellos los originales de un "diario personal" que el militar preparaba con vistas a su publicación.

Desde que Prats fue conducido esposado hasta la frontera de Chile con Argentina, su ex subordinado, Augusto Pinochet, no le ahorró agravio ni humillación alguna. Pudiendo elegir otro país de residencia, Prats eligió Argentina para sentirse cerca de su patria, donde continuaban residiendo sus hijas. Allí fue contratado por una importante empresa, ALUAR, con cuyo sueldo pudo vivir decorosamente. Se atuvo escrupulosamente a su condición de asilado y, al parecer, dada su condición de ex jefe de las fuerzas armadas de su patria, fue considerado técnicamente huésped de las fuerzas armadas argentinas, lo que hizo posible, según versiones, que le fueran asignados permanentemente dos custodios de su seguridad. Ninguno de esos custodios se hallaba presente cuando ocurrió el crimen. Aparentemente, uno alegó en su descargo que había ido circunstancialmente a hacer sus necesidades fisiológicas, y el otro que estaba platicando, a una cuadra de distancia, con una muchacha empleada de servicio en uno de los departamentos vecinos. Otra versión más postula que al día siguiente el ex comandante en jefe del ejército argentino, teniente general Alfredo Carcagno, protestó ante las autoridades militares por la indefensión comprobada de su par y por el hecho de que un huésped de la fuerza armada, por lo tanto bajo la protección de ésta, hubiese sido asesinado.

Más tarde se supo que en las semanas previas Prats había estado recibiendo anónimos escritos y amenazas telefónicas y que, en razón de qué en esos momentos se hallaba en marcha la escalada del terror —el presidente Perón había muerto el 1.º de julio anterior y gobernaba su viuda—, estaba realizando gestiones ante el consulado de Chile en Buenos Aires para obtener un documento provisional de viaje que le permitiera trasladarse por un tiempo al Brasil. Su pedido no obtuvo respuesta inme-

diata. Por el contrario, en cada oportunidad el cónsul repetía la promesa de que en la "próxima semana" le sería proporcionado el documento. Se presta a reflexiones el que, tres días después del crimen, ese cónsul fuese removido de Buenos Aires y trasladado a otro destino.

DONDE ENTRA TOWNLEY

El asesinato del general Prats siguió envuelto en el misterio, no obstante los reiterados pedidos de esclarecimiento hechos por sus hijas en Buenos Aires y Santiago de Chile.

Sólo a principios de 1978, cuando gracias al celo de dos agentes del FBI, Robert Scherre y Carter Cornick y de los investigadores privados y ex amigos de Letelier, Saúl Landau y John Gilmus, se pudo lograr las evidencias de culpabilidad de Michael Townley en el asesinato de Letelier-Moffit, se dieron igualmente pasos en dirección al esclarecimiento del crimen contra los esposos Prats. La clave estaba en el pasaporte de Townley, que éste había utilizado en diversos viajes por cuenta de la DINA chilena a la Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y países de Europa. Estaba extendido a nombre de Kenneth William Enyart y, gracias a él, la justicia norteamericana pudo rastrear gran parte de los distintos itinerarios que cumplió Townley en cumplimiento de misiones encomendadas por la DINA y, más específicamente, por el entonces teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, alto funcionario de la DINA.

Hay una circunstancia lateral que favoreció la relación investigadora de los crímenes Prats-Letelier-Moffit: el funcionario del FBI a cargo del sumario de los dos últimos, Robert Scherrer, era en 1974 oficial de enlace del FBI con las autoridades policiales de Buenos Aires. Si a Scherrer no le correspondió entonces investigar lo de los esposos Prats, puesto que no era función suya, cae de su peso que al encomendarsele lo de Letelier-Moffit y analizar la voladura del vehículo y su contexto, lo haya asociado a sus recuerdos de Buenos Aires. En este sentido, el pasaporte de Townley-Enyart fue una prueba decisiva: el agente de la DINA estuvo en Buenos Aires desde el 10 hasta el 30 de septiembre de 1974. En el documento se aprecia el sello de la Oficina de Inmigración chilena del aeropuerto de Pudahuel consignando como fecha de reingreso inicial el 30; pero sobre ese sello hay una inscripción anulándolo y luego otro sello que da como fecha de reingreso el 1.º de octubre. Sin embargo, hay dos sellos más: uno de salida de la emigración argentina, y otros de ingreso y salida de la inmigración uruguaya, el último fechado el 1.º de octubre. De donde se desprende que Townley-Enyart viajó el mismo día del atentado contra los esposos Prats a Montevideo, y desde allí, sin tocar Buenos Aires, retornó a Chile en un avión de la LAN. No era necesario que él mismo accionara el dispositivo del control remoto, puesto que su especialidad era la colocación de los artefactos en los lugares adecuados. Apretar el botón, según él mismo lo explicó ante sus jueces, puede hacerlo cualquiera.

Es aún temprano adelantarnos a lo que investigue y resuelva en Argentina el juez Marquardt sobre el caso de los esposos Prats, salvo desear que no espere a sus asesinos la misma impunidad que a los militares chilenos que ordenaron la muerte de Letelier. En nuestra opinión, en ambos episodios actuaron los mismos mandantes, incluyendo obviamente al omnipresente Augusto Pinochet. No estamos en condiciones, a la distancia, de adelantar si el juez Marquardt tendrá mayor éxito en solicitar extradiciones, que el ninguno que obtuvo en Estados Unidos el fiscal Propper. Los militares asesinos gozan de seguridades y garantías deducibles de su proximidad y estrecha conexión con Pinochet. Por algo el abogado chileno Sergio Miranda Larrington pudo permitirse, en su alegato final del 8 de agosto en defensa del general Manuel Contreras Sepúlveda, rendir público homenaje a la DINA y sus huestes, diciendo que 'son batallones olvidados de la lucha contra el marxismo'.